

Editorial realizado por el equipo del Instituto Progresista-IPV, con base en la información política disponible hasta el momento sobre la situación en Venezuela 4 de enero 2026.

Cayó el dictador, pero no la dictadura

Cayó el dictador, pero no la dictadura. El chavismo funciona como una superestructura. Quitar algunas piezas puede generar desestabilización, pero el verdadero desafío es comprobar si esa estructura mantiene su cohesión a la luz de los hechos ocurridos en las últimas horas.

La oposición, por su parte, no logró construir una alternativa política real ni unificarse en un bloque sólido capaz de asumir una transición en el momento en que la coalición dominante mostró signos de fractura. María Corina Machado asumió que Trump sacaría a Maduro para entregarle el poder. Sin embargo, Trump terminó negociando con quien pudiera ofrecerle lo que realmente buscaba en términos energéticos y de influencia geopolítica. En ese cálculo, parece que resulta indiferente si ese acceso lo garantiza Delcy Rodríguez o Edmundo González Urrutia, María Corina Machado o Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López o cualquier otro actor del poder.

Conviene poner las cosas en perspectiva. Estados Unidos es un país energéticamente autosuficiente. El petróleo venezolano es atractivo, pero no indispensable. Venezuela se inserta, más bien, en una disputa geopolítica de mayor escala.

En ese contexto, Washington ha trazado una hoja de ruta orientada a preservar su primacía global. El núcleo de la estrategia de seguridad nacional de Trump apunta a impedir que potencias externas consoliden presencia militar o controlen activos estratégicos en el hemisferio occidental. Dicho de otra forma, busca reducir el margen de influencia de China en la región.

Mientras el país intenta retomar una aparente normalidad, mañana 5 de enero se instala la Asamblea Nacional para el período 2025–2030.

En este nuevo Parlamento habrá una presencia limitada de dirigentes del espectro opositor que, convencidos de que la política también se disputa desde los espacios institucionales, han optado por participar. En paralelo, se ratificará a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (abiertamente subordinado al Chavismo) que ayer declaró una supuesta falta temporal de Nicolás Maduro. Según la narrativa oficial, dicha ausencia se debe a que el mandatario estaría secuestrado por el gobierno de los Estados Unidos.

Si analizamos esto como el inicio de un periodo de transición, este escenario no implica necesariamente una ruptura del régimen, sino un proceso de reacomodo interno del poder. Solo el tiempo dirá si esta llamada transición abre una fase de liberalización política capaz de conducir, eventualmente, a una verdadera democratización. Queda por ver si ello permitirá sentar las bases de elecciones libres y competitivas (en las que María Corina Machado se posicionaría) y si, a partir de allí, se consolida en Venezuela un gobierno alineado con Washington.

Un ejemplo histórico de liberalización política en Venezuela fueron los períodos de Eleazar López Contreras (1935–1941) e Isaías Medina Angarita (1941–1945). Tras la dictadura de 27 años de Juan Vicente Gómez (1908–1935), ambos gobiernos hicieron posible una compleja transición hacia un orden más plural, permitiendo la disidencia política, la liberación de presos políticos y la legalización de agrupaciones políticas.

La experiencia acumulada de la política exterior de Estados Unidos muestra que los intentos de promover cambios de régimen por la vía de la presión militar o la intervención directa suelen generar efectos contrarios a los esperados. Décadas de intervención no lograron construir un Estado funcional en Afganistán; Libia derivó en un Estado fragmentado y las secuelas de la guerra de Irak continúan evidenciando los altos costos políticos que ha debido pagar Estados Unidos. Estos antecedentes refuerzan la idea de que la imposición forzada de transformaciones políticas rara vez produce estabilidad duradera. En América Latina, los intentos de intervención en países

como Cuba, Nicaragua, Guatemala o Chile dejaron huellas profundas que aún condicionan política y culturalmente a la región.

En ese marco, la Administración Trump tampoco ha ofrecido una explicación coherente y estructurada sobre sus acciones en Venezuela. Su primera intervención pública sobre el tema pareció dirigida, más que al sistema internacional, a su base política interna (MAGA): un discurso centrado en el petróleo, en la narrativa de fortaleza nacional y en la exhibición de la supremacía estadounidense. No es de extrañarse que después de las declaraciones de lo sucedido en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos anunciase la necesidad de tener el control sobre Groenlandia por motivos de seguridad nacional.

Es lógico que este tipo de declaraciones generen preocupación en los países de la región, pues tocan directamente el principio de soberanía nacional. Mucho se ha debatido y opinado desde fuera del conflicto venezolano sobre la soberanía del país y el interés histórico de los Estados Unidos en nuestros recursos naturales. Pretender que los venezolanos no comprendamos los riesgos que esto implica es subestimar una experiencia colectiva marcada por 26 años de despilfarro de la renta petrolera, utilizada para sostener un proyecto político que comenzó con Hugo Chávez y que terminó destruyendo la industria petrolera, la autosuficiencia energética y políticas sociales fundamentales como la educación y la salud pública de calidad, pilares del período democrático en el que Venezuela fue referencia regional.

Las declaraciones de Donald Trump, por tanto, inquietan y obligan a un análisis más profundo del contexto venezolano, que no admite lecturas simplistas ni miradas unidimensionales. Desde el 3 de enero se ha abierto un proceso político aún incierto, que todo indica no será rápido ni sencillo, y que debe ser evaluado desde múltiples aristas políticas, institucionales y geopolíticas.

Frente a este escenario, surgen preguntas inevitables para la oposición venezolana. Si Donald Trump no es precisamente percibido como un referente democrático, ¿qué nos lleva a pensar que todo este proceso tenga como objetivo final la democratización de Venezuela? También, es importante evaluar el accionar de la oposición



institucional encabezada por el excandidato presidencial Henrique Capriles en este contexto, los hechos nos dirán si se trata de una estrategia política válida o de una adaptación forzada a un tablero diseñado por otros

Amanecerá y veremos.